

Santiago, trece de agosto de dos mil veintiuno.

**VISTOS:**

En estos autos RUC 1800802147-K, RIT 309-2019, del Primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, los jueces MARÍA ISABEL PANTOJA MERINO, QUIEN PRESIDIO LA AUDIENCIA, JAIME GONZALEZ ORRICO Y ENRIQUE DURÁN BRANCHI condenó a **FERNANDO EDUARDO ROJAS VIDELA, JOEL BORIS QUIROZ GUERRERO, FRANCISCO JAVIER RIVAS MARCHANT y FRANCISCO JAVIER ROJAS BUSTAMANTE**, ya individualizados, a cada uno por separado, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autores del delito de robo con intimidación, perpetrado el 17 de agosto de 2018, en la comuna de Pudahuel, con costas. Además condenó a **JOSÉ ALEJANDRO VIDAL ARAYA**, ya individualizados, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de robo con intimidación, perpetrado el 17 de agosto de 2018, en la comuna de Pudahuel, sin costas. En el caso de **JOEL BORIS QUIROZ GUERRERO**, al no reunir con los supuestos que prevé la Ley N° 18.216 para efectos de concederle alguna de las penas sustitutivas contempladas en el referido texto legal, deberá cumplir efectivamente la pena corporal, privado de libertad en el centro penitenciario que determine Gendarmería de Chile, sirviéndole de abono todo el tiempo que han permanecido en prisión preventiva con motivo de esta causa, desde el día 17 de agosto del año 2018 hasta el 31 de mayo de 2021, fecha de comunicación de la sentencia, totalizando 1.018 días.

En contra de ese fallo dedujo recurso de nulidad, el defensor particular Mario Vivanco Pino, en representación del condenado **Joel Boris Quiroz Guerrero**; así como también dedujo recurso de nulidad por la defensoría penal pública, la



abogada Bárbara Antivero Pinochet, en representación del condenado **José Alejandro Vidal Araya**.

En la audiencia del día 27 de julio del año en curso, se escuchó a los apoderados de los recurrentes, señores Mario Vivanco Pino y Cristian Martin Castro, se dejó la causa en estado de acuerdo y se fijó audiencia para la lectura de esta sentencia, en el día de hoy.

**CONSIDERANDO:**□

**PRIMERO:** Que respecto al recurso de nulidad deducido por la defensa de **Joel Boris Quiroz Guerrero** se funda en la causal del **artículo 374 literal e)** del Código Procesal Penal, en relación con el **artículo 342, literal c)** y ambos, en relación al **artículo 297** del mismo código.

Sostiene la defensa particular, en el recurso por don JOEL BORIS QUIROZ GUERRERO, que la conclusión que tuvo el Tribunal a quo de tener por acreditada los hechos y la participación de su defendido en el delito imputado, conforme a lo señalado en el considerando décimo sexto de la sentencia recurrida, fue arribada en contradicción con los principios de la lógica y máximas de experiencia.

Funda su recurso en que de la atenta lectura del considerando décimo quinto de la sentencia de condena, se advierten severas contradicciones y erradas ponderaciones, desde una perspectiva lógica. Específicamente, al sostener que entre la víctima y un testigo de oídas habría contradicciones respecto a la ocurrencia de los hechos, en especial sobre si el furgón que conducía su representado, fue el que participó del delito, ya que no habría claridad sobre la persecución del mismo.

Sostiene además que otra contradicción ocurre respecto al hecho que el vehículo que conducía su representado el día que ocurrieron los hechos no portaba placa patente, lo cual no fue declarado por nadie en ese momento, cuestión que como reconoce el sentenciador se trata de “una omisión importante”.

Asimismo, en sus alegaciones señala que el tribunal efectuó una errónea valoración de la prueba, que lo llevó a condenar a su defendido, respecto al delito



de robo con intimidación, en contravención con el principio de la aplicación lógica de la prueba.

**SEGUNDO:** Que respecto al recurso de nulidad deducido por la defensa de **José Alejandro Vidal Araya** se funda en la causal del **artículo 374 literal e)** del Código Procesal Penal, en relación con el **artículo 342, literal c)** y ambos, en relación al **artículo 297** del mismo código.

Que la defensa, en el recurso de nulidad interpuesto por el condenado JOSE ALEJANDRO VIDAL ARAYA, sostiene, también que la conclusión que tuvo el Tribunal a quo de tener por acreditados los hechos y la participación del sentenciado VIDAL ARAYA en el delito imputado, conforme a lo señalado en el considerando décimo sexto de la sentencia recurrida, fue arribada en contravención de los principios lógicos de razón suficiente y corroboración, conforme a que la misma no da razones suficientes, ya que se funda en conclusiones que no señala la prueba rendida en el juicio oral.

Funda este recurso en que el Tribunal a quo no habría considerado la declaración de su defendido, así como tampoco habría dado las razones del por qué desestimó los testimonios de los co-imputados Rivas Marchant y Rojas Bustamante, todo en relación que su defendido no habría participado en los hechos señalados y que se le vinculó porque habría estado en un paradero cercano al lugar de los hechos.

Por último, en sus alegaciones señala que el tribunal efectuó una errónea valoración de la prueba, que lo llevó a condenar a su defendido, al delito de robo con intimidación, en contravención con el principio de no contradicción, dándole solo valor a lo señalado por el funcionario policial Alexis Moris, que se contradice incluso con lo declarado por el funcionario policial Falcon.

**TERCERO:** Que, por su parte el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: “Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)”.



En su caso, en la letra c) del artículo 342 del mismo Código, se señala que: “Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”.

Al respecto, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal expresa que “Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”.

“El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”.

“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”.

**CUARTO:** Que, es efectivo que el legislador no ha dado libertad absoluta a los jueces penales a la hora de valorar la prueba rendida y establecer tanto el delito como la participación, pues siempre han de respetar la racionalidad, la coherencia y la razonabilidad que los conduce a resolver en un determinado sentido. Se trata, en fin, más que de no vulnerar principios de la lógica filosófica, simplemente, en la labor de ponderación de la prueba, de respetar el sentido común, la sensatez. La octava acepción de la palabra “lógica” dada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la que más se adecua a la que el legislador menciona en el citado artículo 297: “Modo de pensar y de actuar sensato de sentido común”. Couture resume el significado de las reglas de la sana crítica como “las reglas del correcto entendimiento humano”.



**QUINTO:** Que ambas defensas, en sus recursos de nulidad, sostiene que el Tribunal a quo arribó a una conclusión errónea vulnerando en ambos casos el principio de la lógica y la razón suficiente, en la ponderación de la prueba.

**SEXTO:** Que el Tribunal a quo tuvo por acreditado, en lo pertinente, en el considerando décimo sexto de la sentencia recurrida lo siguiente: “El día 17 de agosto de 2018 siendo aproximadamente las 12:15 horas, la víctima JOSE RAMOS SEPULVEDA, conducía el camión de la empresa FPH Transporte Limitada de propiedad de propiedad de Francisco Javier Peralta Henríquez placa patente única YN.8071 con su respectiva rampla que trasportaba un container con zapatillas avaluadas en \$167.000.000, por la autopista Costanera Norte donde giró para salir a Avenida El Parque, en la comuna de Pudahuel, es interceptado por los acusados Francisco Javier Rojas Bustamante, Francisco Javier Rivas Marchant, José Alejandro Vidal Araya, Fernando Eduardo Rojas Videla y, Joel Boris Quiroz Guerrero, acompañados de Mauricio Isaac Ortiz Sánchez y Nicolás Andrés Muñoz Díaz, quienes previamente concertados, se trasladaban en dos vehículos, un automóvil Hyundai placa patente BRTZ.11 y un furgón Peugeot, modelo Bóxer, placa patente CVZW.36, bajándose cuatro de ellos, uno premunido de armas de fuego o con apariencia de tal, procediendo intimidar a la víctima, obligándolo a cubrirse el rostro manteniéndolo en la litera del camión, sustrayéndole su celular y la suma aproximada de \$130.000, huyendo los acusados con el camión y su carga, y en los vehículos en que se trasladaban escoltando el camión y la carga sustraída.”.

Para arribar al establecimiento del hecho que antecede, tuvo presente la siguiente prueba: A) Declaración del acusado Fernando Eduardo Rojas Videla; B) Declaración del acusado Joel Boris Quiroz Guerrero; C) Declaración del acusado José Alejandro Vidal Araya; D) Declaración del acusado Francisco Javier Rivas Marchant; E) Declaración del acusado Francisco Javier Rojas Bustamante; F) Declaraciones del chofer del camión don José Antonio Ramos Sepúlveda y del dueño del camión, don Francisco Javier Peralta Henríquez; G) Declaraciones de los testigos don Rodrigo González Espinoza, don Patricio Andrés Olea Zúñiga y don



Fernando Mercedes Rojas Reyes; H) Declaración de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile don Rodrigo Alexis González Espinoza, don Héctor Moya Larrain, don Cristopher Zepeda Gómez, don Rodolfo Mario Cornejo Rojas, don Antonio Falcon González, don Alexander Esteban Moris Gaete, don Mauricio Alfonso Chacón Cantillana; don Estaban Arturo Donoso Leiva; don Leonardo Javier Fuenzalida Quezada y don Luciano Almonacid Oróstegui; K) Prueba pericial consistente en el relato de los expertos don Eduardo Silva Guarda, perito fotográfico; don Roberto Alejandro Jiménez Silva, perito armero; doña Verónica Emilia Arias Guajardo, perito huellográfica y dactiloscópica; don Mauricio Eduardo Ortega Chacón, perito de electro ingeniería o en telecomunicaciones; y don Cristián Patricio Satelices Galaz, perito topógrafo; l) Prueba documental, consistente en l.1. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro Civil e Identificación del vehículo placa patente YN-8071; l.2. Guía de Despacho N°1762812 de la Agencia de Aduanas Jorge Stein y Cía. Ltda., de 13 de agosto de 2018; l.3. Copia del diario El Mercurio, sección Economía y Negocios, de 20 de agosto de 2018; y l.4. Copia de escritura de adquisición de 25 de septiembre de 2017, repertorio 1617-17 celebrada ante el Notario Público Suplente don Alejandro Javier Guerra Pinto.

**SÉPTIMO:** Que, al contrario de lo que sostienen las defensas, de la sola lectura de los considerandos Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo Primero del fallo que se revisa se advierte que los sentenciadores al hacer un examen pormenorizado de los medios de prueba reunidos se apegaron a la lógica, a las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicamente afianzados, lo cual hace evidente y en particular la construcción de los indicios a partir de los cuales por lo tanto, no podían sino concluir, que **JOSE ALEJANDRO VIDAL ARAYA** cometió el delito de robo con intimidación, establecido en el artículo 436 inciso primero, en relación con los artículos 432 y 439, todos del Código Penal y que **JOEL BORIS QUIROZ GUERRERO** cometió el delito de robo con intimidación, establecido en el artículo 436 inciso primero, en relación con los artículos 432 y 439, todos del Código Penal.



**OCTAVO:** Que, conforme a lo expuesto anteriormente, solo cabe desestimar ambos recursos de nulidad en estudio.

Y visto, también, lo dispuesto en los artículos **372, 373 letra b), 374 letra e), 376 y 384** del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA**, el recurso de nulidad interpuesto por la abogada defensora Bárbara Antivero Pinochet, en representación del encausado **JOSE ALEJANDRO VIDAL ARAYA**; así como se rechaza también el recurso de nulidad interpuesto por el defensor particular, abogado Mario Vivanco Pino, en representación de **JOEL BORIS QUIROZ GUERRERO**, ambos en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en causa RUC 1800802147-K, RIT 309-2019, y, en consecuencia, se declara que dicho fallo, **no es nulo**.

**Regístrese y comuníquese.**

**Redactó Rodrigo Montt Swett, abogado integrante.**

**No firma la Ministra señora Lusic, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.**

**No firma el Ministro (s) señor Padilla, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones en esta Corte.**

**Rol N° 2506-2021**

Pronunciada por la **Novena Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada por el Ministro (S) señor Sergio Padilla Farías y por el abogado integrante señor Rodrigo Montt Swett





TYBKKGKNXF



Proveído por el Señor Presidente de la Novena Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a trece de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>